

## Entrevista a Gustavo Triana, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-

Helen Orjuela

¿Qué es un informal?, ¿por qué en la actualidad un 60% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad?, ¿qué políticas han de diseñarse para superar este fenómeno? Estas son preguntas que durante los últimos gobiernos no han logrado responderse.

Con el ánimo de contribuir al estudio y análisis de este fenómeno, *Divergencia* se reunió con GUSTAVO TRIANA, dirigente de la Unión Sindical Obrera -USO- y actual vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, organización reconocida en el ámbito mundial, por la denuncia abierta del asesinato de sindicalistas y la clara oposición a las políticas de tipo neoliberal.

*Para la CUT, ¿que es la informalidad laboral?*

Consideramos como trabajadores informales a todas aquellas personas que

trabajan bajo condiciones laborales atípicas, es decir, por fuera de lo estipulado por las leyes laborales. Ejemplo de lo anterior son: las unidades productivas familiares, los trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado -CTA-, Órdenes de Prestación de Servicios -OPS-, bolsas de empleo, maquiladoras, vendedores ambulantes, el llamado rebusque, recicladores y personas sujetas a contratos civiles.

De una población económicamente activa de aproximadamente 20 millones, el 58%, según datos oficiales y de entidades afines, son informales. En la CUT consideramos que un buen índice para medir la informalidad en el país es el porcentaje de trabajadores asociados a riesgos profesionales, salud, pensiones y cajas de compensación familiar; sin embargo, el debate sobre el concepto de informalidad se encuentra aún en el orden del día.



Fuente: [http://www.dinero.com/photos/347/ImgArticulo\\_T2\\_27821\\_2010415\\_122851.jpg&imgrefurl](http://www.dinero.com/photos/347/ImgArticulo_T2_27821_2010415_122851.jpg&imgrefurl)

*¿Cuáles considera que son las causas de la informalidad?*

La principal causa es la destrucción de la producción industrial y agrícola del país. Situación que corresponde a las políticas implementadas por los últimos gobiernos –apertura económica y privatizaciones, TLC, confianza inversionista etc.–, que han traído como consecuencia la desaparición de la industria local y la profundización de fenómenos como la tercerización laboral, el rebusque y el establecimiento de industrias maquiladoras dedicadas a la exportación que demandan mano de obra barata. Por otro lado, el Estado colombiano no ejerce soberanía sobre sus recursos, puesto que los entrega a multinacionales por medio de concesiones; de esta manera pierde potenciales fuentes de empleos y recursos para el Estado.

Finalmente, nos enfrentamos a un Estado que aplica todo el rigor de la ley a las pequeñas unidades productivas, a la hora de exigirles pago de impuestos, pago de parafiscales, riesgos profesionales, seguridad social, etc., mientras que no existe una política similar para las multinacionales y los grandes monopolios que, por el contrario, están gozando de exenciones tributarias.

*¿Qué podemos esperar de las políticas del gobierno de JUAN M. SANTOS en materia de empleo?*

En primer lugar, podemos esperar una profundización de las políticas de carácter neoliberal en el país, es decir, menor soberanía sobre los recursos, una mayor dependencia de las importaciones de excedentes agrícolas de Estados Unidos y Europa de artículos y mercancías que llevarán a la desaparición de la industria nacional y producción campesina. SANTOS acaba de bajar los aranceles del 15% al 5% para renglones como el caucho.

En el tema de salarios, consideramos que tras conocer abiertamente la corriente económica que siguen los actuales ministros, no es de extrañarnos que en un futuro no muy lejano se proponga la eliminación del salario mínimo. El actual ministro de Protección social lo propuso siendo miembro de Fedesarrollo y en la semana que termina, el presidente de

Colpatria declaró que la existencia del salario mínimo impide la creación de nuevos empleos.

En materia de pensiones es claro que nos encontramos frente a una bomba de tiempo, las cotizaciones desde la expedición de la Ley 1993 están siendo captadas por los fondos privados, es decir por el capital financiero y no hay dinero para pagar las pensiones causadas a los trabajadores del Estado y a los del régimen de prima media, pues estos fondos se descapitalizaron. Sin embargo, las soluciones que plantearon gobierno y empresarios apuntan a negar el derecho; prueba de ello es el aumento en la edad para pensionarse y el número de semanas cotizadas.

*¿Qué opina de iniciativas como la ley de primer empleo y la política de formalización laboral?*

El proyecto de ley se llama de formalización del trabajo —la cual considero un caso de demagogia pura—, y tiene como finalidad obligar al sector informal de las pequeñas unidades productivas, comerciales y de servicios, a formalizarse para tributar e ingresar a los circuitos financieros, favoreciendo realmente a los bancos y a los monopolios industriales y comerciales, pues los liberan de competidores. Este proyecto de ley no pone términos a la eliminación del trabajo

mercaderizado que utilizan las grandes multinacionales del petróleo, la minería, la banca, la salud y grandes empresarios nacionales, como los del azúcar, etanol, palma, flores, ingeniería, entre otros.

*¿Qué iniciativas propone la CUT como posibles soluciones a la informalidad laboral?*

El primer obstáculo es el deterioro de la soberanía nacional; por lo tanto, el Estado debe recuperar el manejo soberano de sus recursos naturales y reactivar el aparato productivo nacional.

Necesitamos líderes que representen los intereses de la nación y que se opongan a las políticas regresivas que desmontan los derechos laborales, niegan derechos sociales y ponen nuestro debilitado mercado interno a merced de las importaciones de productos que podemos producir en Colombia.

En nuestro país debemos aprender de países como Bolivia, Argentina y Venezuela, entre otros, que han logrado disminuir sus índices de pobreza y enrutarse por las vías del desarrollo y el recobro de la soberanía, tras dejar de acatar las políticas que organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional les imponen a los países pobres.